

CIUDADANÍA Y POLÍTICA

Por Edwin A. Vegas Gallo

La situación política que vive, nuestro país desde tiempo atrás, es la fiel manifestación que ciudadanía y política; siendo sinónimos en sus raíces, más bien se comportan como antónimos.

Ciudadanía viene de la voz latina “civitas” ciudad y política del griego “polis” o ciudad. Lo perverso es que los partidos políticos sólo buscan a los ciudadanos, en época electoral e incluso los halagan con regalos camuflados, ahora que la ley electoral lo prohíbe.

Por el lado de los ciudadanos o ciudadanía es incomprensible dejar la vía abierta, para que los advenedizos de turno de ayer, de ahora y esperemos no sean de siempre, que como como saltimbanquis cambian de camiseta política, dedicándose a proteger los intereses de los dueños de los partidos, cuales capataces serviles. Allí tenemos el caso de los niñatos de Acción Popular, con la soterrada complacencia de la ex presidenta del Congreso María Alva.

Asimismo se sigue predicando con una taxonomía política, que no ha evolucionado en los pasados 50 años, precisamente porque a los “ideólogos del jurásico político peruano”, no les interesa construir ciudadanía para la protección de los intereses de esa obsoleta taxonomía política.

Ello hace que tengamos gobiernos poco representativos y que solamente representan los intereses de los dueños de los partidos políticos, teniendo acceso al poder, para el intercambio de favores, en falta de democracia, así como la falta de responsabilidad en el Congreso (dilación de elecciones) y además de la centralización de la autoridad gubernamental de turno, añadido a estructuras inapropiadas y políticas insostenibles e inconsecuentes.

Ante ello se necesita de una ciudadanía más comprometida con la decisión política, ejerciendo su derecho a participar para una gestión eficaz, con la posibilidad de beneficiarse con políticas públicas, sin competencia ni exclusión de los escasos recursos públicos.

Hay que alentar y acelerar reformas democráticas en el país con protestas pacíficas, con prensa objetiva; aumentando la responsabilidad en democracia con programas de educación y formación del sector público adaptadas al desarrollo personal y a prácticas éticas, así como la designación y contratación de personal cualificado para asegurar conducta efectiva y responsable en verdadera descentralización territorial y política.